

# Nuevas modalidades del terrorismo fascista

por Mario ZAPATA

En Madrid ha muerto "una Madre Coraje". Una mujer que jamás usó la metralleta, que nunca lanzó una bomba para ganar la batalla en que estaba empeñada. Sólo usó la palabra. Y por eso era para Videla y sus uniformados argentinos: "una subversiva internacional con claros propósitos de socavar las bases de nuestra sociedad occidental". Los dictadores no aprenden trucos nuevos. La subversión de la señora Esther Gianotti de Molfino consistía en una enérgica, dolorosa e infatigable protesta ante el gobierno de Videla, ante el mundo entero, por la detención y la posterior desaparición de su hija Marcela y de su yerno Guillermo Amarilla. Esa mujer, de 54 años de edad, se había atrevido a denunciar que sus tres hijos habían sido arrestados. Dos de ellos, gracias a su acción y a la presión internacionales, consiguieron exiliarse. Pero del matrimonio Amarilla nunca más se supo.

Ante la casa Rosada, junto a otras madres argentinas, semana tras semana, clamo por sus hijos, primero: por todos los hijos, hermanos, padres y esposos desaparecidos, después: Las madres, las "locas de Mayo", están avaladas por numerosas instituciones internacionales para la concesión del Premio Nobel de la Paz. Si en justicia lo reciben, la señora Molfino no será quien lo recoja. Porque ha sido asesinada en Madrid.

La historia es idéntica, salvo su horrible final, a la que los servicios secretos argentinos protagonizaron en México. Con una sensible diferencia: que la Secretaría de Gobernación (entonces dirigida por don Jesús Reyes Heróles) y nuestra policía nacional frustraron el intento de hacer de nuestro suelo coto de cacería de exiliados políticos amparados en la generosidad del gobierno mexicano. Cosa que la policía española no ha sabido o no ha querido hacer.

Hace ya más de dos años fue detenido en Rosario (Argentina) el comandante montonero Tulio Valenzuela en unión de su mujer embarazada de varios meses. El marido fue puesto por la policía argentina ante la opción de ver asesinar a su mujer o viajar a México, acompañado de dos oficiales del servicio secreto de Videla, para conectar a los policías con unos montoneros a los que pensaban dar muerte. Tulio Valenzuela aceptó aparentemente entregar a sus compañeros. Pero una vez en la capital de la República informó a las autoridades de Gobernación de la presencia del comando asesino. Nuestra policía actuó rápida y eficientemente, y los frustrados raptos fueron devueltos a su lugar de origen convincentemente persuadidos de que con las autoridades mexicanas no se juega. El embajador argentino fue enérgicamente advertido de que no habría tolerancia alguna en el futuro para acciones similares.

□ □ □

Una historia similar se ha producido en España. El 21 de julio, en la madrileña calle de Tudor, número 37, se encontró el cadáver de una mujer de cincuenta años en evidente estado de descomposición. El caso saltó a algunos periódicos como uno

más de los tantos hechos que salpican las páginas de sucesos. Pero a los pocos días, el caso Molfino, una horrible y trágica historia que no empieza ni acaba con el cadáver de la calle Tudor, y en las que estarían implicadas las fuerzas policiales de Argentina, Perú y Bolivia, se iba a convertir en un escándalo internacional en el que no sólo se estarían violando los derechos humanos, sino, además, y flagrantemente, la soberanía nacional española.

Para explicarse el "caso Molfino" no basta remontarse al mes de junio y a Perú, sino que habría que referirse al convenio de inteligencia entre los Ejércitos de Perú y Bolivia, firmado en 1965 y prorrogado después por el régimen del general Bermúdez. O remitirse a la primera reunión de alto nivel entre representantes de las fuerzas policiales de Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia celebrada en Buenos Aires durante 1974, donde nace la "Operación Cóndor", con las que las dictaduras latinoamericanas unían sus esfuerzos para acabar con la oposición democrática en el exilio. Y también recordar la "Doctrina Viola", propugnada en Bogotá durante 1979, donde el ex comandante en jefe del ejército argentino y probable sucesor de Videla, propugnaba la "defensa regional de los ejércitos a través de la coordinación de sus servicios para asegurar el modo de vida occidental..." Habría que seguir la larga lista de detenidos-desaparecidos en territorio extranjero. Y no olvidar las operaciones fracasadas: los secuestros de Firmenich y Croato en México y Madrid durante 1978. Tampoco hay que dejar de lado los asesinatos cometidos en territorio argentino contra súbditos extranjeros: el general chileno Prats, el general boliviano Juan José Torres, los dirigentes uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz, y la larga lista de militantes que creyeron encontrar asilo en ese país.

El 5 de junio de 1980, en vuelo regular de aerolíneas Argentinas, llegaron a la capital peruana ocho integrantes de un comando represivo argentino con objeto de capturar a 15 exiliados residentes en el país, al mando del coronel Ronald Rochas. Con ellos (como ya es costumbre) viajaba un prisionero, Federico Frías, secuestrado en Argentina, para identificar a los exiliados. Altos jefes del ejército peruano colaboraron en la operación. Entre el 12 y el 13 de junio se procede a los secuestros de María Inés Raberta, Esther Gianotti de Molfino y Julio César Ramírez. Los partidos políticos de izquierda denunciaron el escandaloso hecho, lo que permitió a las otras 12 futuras víctimas salvar la vida. El 24 de junio se anunciaba en la prensa peruana la muerte por tortura de, por los menos, dos de los desaparecidos (María Inés Raberta y Francisco Frías). Y los nuevos gobernantes peruanos debieron solicitar —galantemente— al general Videla que se abstuviese de asistir a los actos de traspaso del gobierno a Belaúnde Terry. Una comisión investigadora amenaza con la propia permanencia en el cargo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas peruanas, general Richter.

Cuando el turbio asunto salió a la luz pública, un

problema se planteó a los cerebros grises de la operación: ¿Cómo explicar la desaparición de los ciudadanos argentinos? ¿Qué hacer con Molfino y Ramírez?

El 16 de junio, dos individuos de nacionalidad argentina alquilaban un departamento en la calle Tudor 37 de Madrid, a nombre de Julio César Ramírez. El 18 de julio ingresaba en él una mujer que no volvería a salir. El 19, los dos hombres abandonaban el lugar. El 21, la fetidez proveniente del apartamento lleva a los encargados de la limpieza a abrir la puerta. En la habitación, una mujer, en ropas íntimas, yace cadáver en la cama. En el departamento no se encuentra huella dactilar alguna. Pero si hallan varios —demasiados— documentos: dos pasaportes con la foto de la señora Molfino (con nombres diferentes) y su cédula de identidad argentina: un pasaporte a nombre de Luis Esteban Almirón, con la foto de Ramírez y un pasaje aéreo a nombre de la señora Molfino con destino a París.

El día 24 el periódico Clarín de Buenos Aires, en una nota titulada: "Argentinos buscados", daba datos que aún no habían sido proporcionados por la policía española. El 10 de agosto, la Dirección General de Seguridad corrobora en Madrid, la identidad de la fallecida. Ese mismo día, el embajador argentino, Jorge Washington Ferreira, convoca una rueda de prensa donde, insistiendo en que se trata de una muerte natural, declara que el hecho se desea utilizar como maniobra de desprestigio a las autoridades peruanas y argentinas.

El primer informe pericial, fechado el 23 de julio, fue dado a conocer por la Comisión Argentina de Derechos Humanos: "Muerte por insuficiencia cardiovascular que podría estar motivada por una intoxicación exógena". La Jefatura de Policía distribuye después una nota en la que declara que la súbdita argentina utilizaba documentación falsa y era esperada por dos compatriotas. Estupor ha causado esta declaración: ¿Cómo saber que "viajaba sola y era esperada", si no estaba previamente vigilada?

Muchos hilos sueltos, demasiados datos confusos en este caso. ¿Llevaron a la señora Molfino para matarla y demostrar así que los desaparecidos son realmente fugitivos que aparecen en el otro extremo del mundo? ¿La llevaron aterrorizada para servirles de introducción en el exilio y en el último momento no la pudieron dominar y tuvieron que matarla? De una forma o de otra, nos encontramos ante el tráfico de carne humana prisionera, ante una mercancía inusitada producida por la Internacional del terrorismo de derechas. Algo que ni siquiera los nazis hicieron en su día.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE), a través de sus secretarios generales, Felipe González y Santiago Carrillo, han hecho llegar una serie de preguntas al gobierno: destinadas a obtener una versión oficial de los hechos y conocer las medidas que las autoridades piensen tomar ante este nuevo escándalo del terrorismo fascista internacional.